

7045

ORDEN de 6 de marzo de 1995 por la que se dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 1.425/1991, promovido por don Pedro Morillo Majarón.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 29 de noviembre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 1.425/1991 en el que son partes, de una, como demandante don Pedro Morillo Majarón, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 5 de julio de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 19 de noviembre de 1990, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Que estimando el presente recurso número 3/1.425/1991, interpuesto por la representación de don Pedro Morillo Majarón, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de 19 de noviembre de 1990 y 5 de julio de 1991, descritas en el primero de los fundamentos de derecho, que las anulamos por ser contrarias al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho del recurrente a compatibilizar las actividades de Secretario de la Cámara Agraria Local de Martín de la Jara (Sevilla) y la de empleado de la Caja de Ahorros de Ronda, en la misma localidad, en los términos solicitados por el interesado.

Segundo.—No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid 6 de marzo de 1995.—P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

7046

ORDEN de 28 de febrero de 1995 clasificando la fundación «Tutelar Aragonesa para Deficientes Mentales Luis de Azúa», instituida en Zaragoza.

Visto el expediente instruido para la clasificación de la fundación «Tutelar Aragonesa para Deficientes Mentales Luis de Azúa», instituida en Zaragoza.

Antecedentes de hecho

Primero.—El patronato de la fundación presentó en este departamento escrito solicitando la clasificación de la institución como de beneficencia particular.

Segundo.—Entre los documentos aportados en el expediente por el petionario obra copia de la escritura de constitución de la fundación, debi-

damente liquidada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, otorgada ante el Notario de Zaragoza don Jesús Martínez Cortés, el día 6 de junio de 1994, con el número de protocolo 1761, así como escritura de modificación de Estatutos otorgada ante el mismo Notario el día 19 de septiembre de 1994, con el número de protocolo 2717.

Tercero.—En el artículo sexto de los Estatutos queda determinado el fin de la fundación, que es «la tutela y protección de las personas con deficiencia mental».

Cuarto.—El patronato de dicha institución se encuentra constituido por: Don Jaime Sanau Villarroya, como Presidente; doña Ana María Cortés Navarro, como Vicepresidenta; don José María Quilez González, como Tesorero; don José María Fabrat Claver, como Secretario, y como vocales, don Rafael Anglés Valles, don Angel Bonet Navarro, doña María Pilar Fernández Clemente, don Fernando Lacasa Echeverría, don Roberto Salvanes Pérez y don Juan José Velasco Pérez.

Quinto.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación queda recogido en los Estatutos por los que se rige, constanding expresamente el carácter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho órgano de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de presupuestos al Protectorado.

Sexto.—Los bienes adscritos a la fundación tienen un valor de 1.000.000 de pesetas, depositado en una entidad bancaria a nombre de la fundación.

Séptimo.—La Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Asuntos Sociales de Zaragoza, al elevar el expediente, lo acompaña de informe en el que se manifiesta que se han cumplido los requisitos y trámites legales, habiéndose concedido el preceptivo trámite de audiencia, sin que durante el mismo se haya formulado alegación alguna, según se acredita en la certificación que se acompaña, por lo que propone sea otorgada la clasificación solicitada.

Octavo.—Sometido el expediente al preceptivo informe del Servicio Jurídico del departamento, este es facilitado en sentido favorable, pudiéndose acceder a la clasificación solicitada.

Vistos la Constitución Española, el Real Decreto y la Instrucción de 14 de marzo de 1899, los Reales Decretos de 8 de abril de 1985, 11 de julio de 1988, 20 de julio de 1988 y la Orden de 17 de marzo de 1994.

Fundamentos de Derecho

Primero.—Esta Subsecretaría es competente para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Protectorado del Gobierno sobre las fundaciones benéficas particulares, tiene delegadas de la titular del Departamento por la Orden de 17 de marzo de 1994, en relación con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril; 727/1988, de 11 de julio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales; 791/1988, de 20 de julio, por el que determina la estructura orgánica inicial del Ministerio de Asuntos Sociales, y el artículo 7.º, apartado 1.º, de la Instrucción de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, en el que se estipula que corresponde al Protectorado del Gobierno la facultad de clasificar las instituciones de beneficencia.

Segundo.—Conforme previene el artículo 54 de la Instrucción citada, el promotor del presente expediente de clasificación se encuentra legitimado por tener el carácter de representante legal de la fundación, según consta en la documentación obrante en el expediente.

Tercero.—El artículo 4 del Real Decreto de 14 de marzo de 1899, dice que son de beneficencia todas las instituciones creadas y dotadas de bienes particulares y cuyo patronazgo y administración hayan sido reglamentados por los respectivos fundadores, circunstancias todas ellas que concurren en el presente expediente.

Cuarto.—El capital fundacional de 1.000.000 de pesetas se estima, como recoge el artículo 58 de la Instrucción, suficiente para el cumplimiento de los fines benéfico-asistenciales señalados a la institución, que se relacionan en el apartado tercero de los antecedentes de hecho.

Quinto.—El patronato de dicha institución se encuentra constituido por: Don Jaime Sanau Villarroya, como Presidente; doña Ana María Cortés Navarro, como Vicepresidenta; don José María Quilez González, como Tesorero; don José María Fabrat Claver, como Secretario, y como vocales, don Rafael Anglés Valles, don Angel Bonet Navarro, doña María Pilar Fernández Clemente, don Fernando Lacasa Echeverría, don Roberto Salvanes Pérez y don Juan José Velasco Pérez.

Sexto.—Dicho patronato queda obligado a rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado del Gobierno y siempre a justificar el cumplimiento de las cargas de la fundación cuando fuere requerido al efecto por el Protectorado.